

## Las coordinadoras de masas y la modernización política<sup>1</sup>

# Las grietas de la utopía

Luis Hernández\*

*Si de algo se puede estar seguro es que la transición hacia un nuevo esquema de relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado no será ni lineal ni fácil. En ella están profundamente imbricados la reforma del Estado, la reforma del PRI y las posibilidades de éxito del modelo de desarrollo económico salinista.*

### La encrucijada

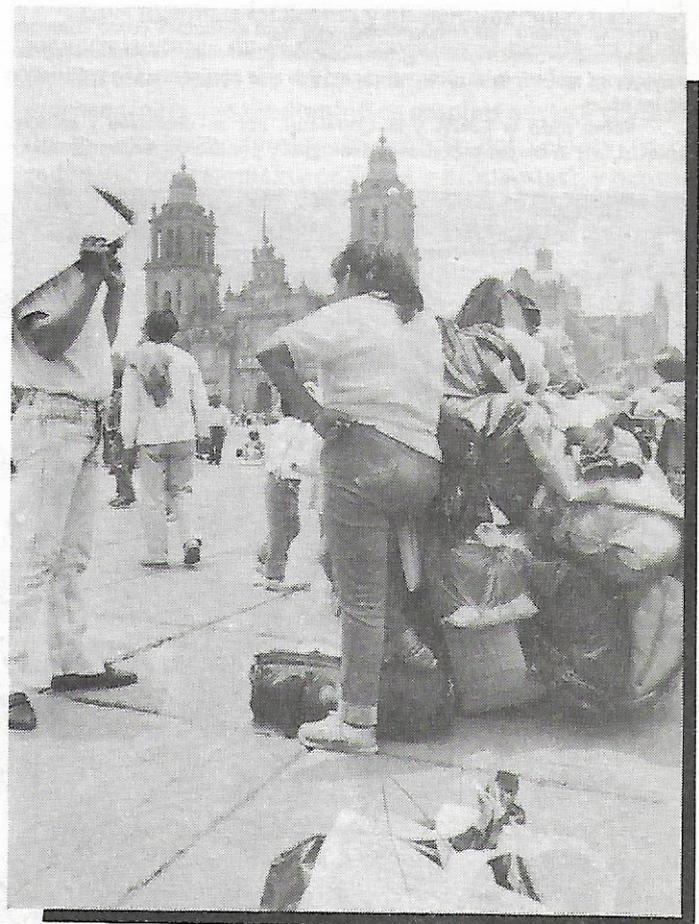
Actores fundamentales de las luchas sociales durante más de diez años, las coordinadoras de masas se encuentran hoy ante grandes retos. Ellas fueron elementos claves en el desencadenamiento de la erosión creciente del pacto corporativo y de la crisis del régimen de partido de Estado claramente manifiesta en la coyuntura electoral de julio de 1988. Desde distintas vertientes, alimentaron a los dos grandes proyectos políticos que se disputan la conducción de las organizaciones sociales: el neocardenismo y el salinismo. Han estimulado y conducido el ascenso en la lucha reivindicativa de los últimos dos años. Sin embargo, han tenido enormes dificultades para capitalizar estratégicamente esta situación.

Ello es resultado de los supuestos políticos con los que fueron creadas, de la cultura que generaron a lo largo de más de diez años, de las relaciones políticas que establecieron con los funcionarios públicos, de una gran inadecuación entre el discurso del proyecto y su práctica, y de una profunda modificación de la realidad política nacional.

### El terremoto neocardenista

La superación de las posiciones abstencionistas entre los dirigentes de las coordinadoras de masas ha sido un largo y traumático proceso, en muchos sentidos no culminado aún. Ciertamente, desde el momento mismo de su fundación corrientes como el MRP en el Valle de México, la COCEI en Juchitán, o las fuerzas sociales influidas por el PRT, reivindicaron la necesidad la lucha de masas con la participación electoral, pero, siempre fueron al interior de estos acuerdos, posiciones minoritarias. Si para amplios sectores el abstencionismo de las coordinadoras era un medio para no politizar artificialmente la lucha reivindicativa y para man-

tener una obligada pluralidad, para muchos otros, el abstencionismo era una posición estratégica. Según estos últimos, parlamentarismo era sinónimo de reformismo y socialdemocracia, y, por lo tanto, era incompatible con un proyecto revolucionario. Y, además, era un instrumento de los partidos de la vieja izquierda para hacerse de una base social con la



Arturo García

\*Asesor educativo del INAH

que no contaban. La participación electoral fue motivo de acres disputas en casi todos los acuerpamientos sectoriales y preludio de tormentos constantes.

La experiencia del ayuntamiento popular de Juchitán abrió brecha en muchos sentidos y modificó el axioma de *elecciones = a reformismo*. Después, el ascenso panista en el norte del país y el cerco estatal sobre varias fuerzas regionales, llevó a que varias de ellas se replantearan la participación electoral. Dentro del movimiento urbano popular la actitud primero del CDP de Chihuahua y después del CDP de Durango ante las elecciones hirió de muerte a las posiciones abstencionistas. Estas organizaciones, en su primera incursión parlamentaria se ubicaron como las terceras fuerzas electorales en sus estados, al tiempo que se abrían a nuevos sectores sociales y ganaban una mayor legitimidad política.

Las elecciones presidenciales de 1988 trastornaron los esquemas políticos de los núcleos dirigentes de las coordinadoras. De entrada, y desde una lógica que pensaba la lucha social como resultado de la confrontación de clase contra clase, la aparición de la Corriente Democrática del PRI fue leída como una pugna interburguesa sin mayores consecuencias. Los llamados a la unidad formulados por esta corriente fueron juzgados como intentos por robarse a las fuerzas sociales presentes en los destacamentos. Los generales buscaban tropas. Desde este punto de vista, el partido que más se acercaba a las posiciones de estos sectores era el PRT. Su propuesta era la de desarrollar un polo clasista, poner el énfasis en la denuncia y abrir las candidaturas a los dirigentes de las organizaciones sociales. La situación era, sin embargo, complicada. En los hechos, el PRT asumió una actitud sectaria y arrogante, sobrestimando su fuerza y maltratando a la de posibles aislados; ello era particularmente grave en un medio político en el que el trotskismo no goza de muchas simpatías. En sentido estricto, sólo una parte de las fuerzas de la CUD decidieron hacer alianza con este partido. Otros como el CDP de Durango, el FPTyL de Nuevo León, la UPREZ en el Valle de México y la UCISVER decidieron hacer compromisos con el PMS, al igual que otras fuerzas relevantes de las coordinadoras.

El neocardenismo articuló muy rápidamente a las bases de muchas organizaciones regionales. Aunque la CNTE decidió no tomar posición en las elecciones, muchos de sus principales dirigentes y activistas se encontraron en las filas de este movimiento. Lo mismo sucedió con la CNPA. En el caso de la UNORCA algunos dirigentes regionales asumieron —como resultado de una vieja relación de trabajo— compromisos políticos con el candidato del PRI. Sin embargo, los miembros de sus organizaciones votaron en amplias franjas del país por Cárdenas; esto sucedió con varias organizaciones pero de manera muy destacada con la Tosepan. Otras direcciones, como la de la Asamblea de Barrios, la UPNT-Norte —escindida de la UPNT-Sur a raíz del apoyo de la segunda al PRT— y de manera muy destacada la de la Coordinadora Estudiantil Universitaria, se sumaron muy rápidamente a la ola neocardenista, capitalizándola jugosamente.

Algunos dirigentes mantuvieron en alto las banderas del abstencionismo hasta el final. Provenientes de acuerpamientos como el MPI, el FNNDP o el MIR vieron pasar de frente la movilización de masas más importante en los últimos 20 años. Incapaces de comprender el significado del ascenso tuvieron que limitarse al enconchamiento y a la espera de tiempos mejores.

### La ofensiva salinista

Desde el inicio mismo de la campaña el equipo de Salinas buscó o aceptó una relación con muchos de los principales contingentes que forman las coordinadoras. En muchos sentidos, una parte de ese equipo había diseñado su política a partir de la relación con los nuevos movimientos sociales desde ocho años atrás. Manuel Camacho desde SEDUE, o Raúl Salinas desde DICONSA —por dar dos notorios ejemplos— habían tratado con la CUD, con la CONAMUP, con sectores de la CNPA y, muy destacadamente, con la UNORCA.<sup>2</sup> En esta relación no sólo resolvieron algunas demandas de estos contingentes, sino que les dieron cobertura política federal en contra de fuerzas locales, y, sobre todo, construyeron un esquema de relación nuevo que con el tiempo sería un elemento fundamental en la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado: la concertación social.<sup>3</sup> En los hechos, reconocieron en ellos a nuevos interlocutores sociales al margen de las organizaciones corporativas, y apostaron a ellos —con muchos bemoles, evidentemente— como sujetos de la modernización.

En sentido estricto, las direcciones de los contingentes sociales que construyeron con este equipo una relación política no sacrificaron la autonomía de sus organizaciones. Ellos solucionaron problemas reales de los sectores populares y sirvieron de contrapeso a las fuerzas más atrasadas del régimen a cambio de espacios de negociación y sobrevivencia. No tuvieron que renunciar a ser oposición en este trato.

Sin embargo, el ascenso del neocardenismo complicó las cosas, pues desgarró a la “familia revolucionaria” disputándole al régimen su herencia política, y gestó una oposición de centr-izquierda fuerte y beligerante que desafió de lleno la legitimidad del triunfo de Salinas de Gortari.

Para estas direcciones, la situación se complicó enormemente. Primero, porque una fuerza en la que ellos tenían una influencia muy diluida fue la que pudo capitalizar el descontento popular. Segundo, porque ese descontento se expresó a través de canales electorales y ciudadanos, en torno a una figura que reivindicaba la democracia y el nacionalismo, y no a través de una política sectorial, de organizaciones gremiales y con un discurso clasista. Tercero, porque desde el poder se desarrollaron presiones para que sea dirigencias siguieran caminos separados del neocardenismo. Cuarto, porque en el equipo de dirección del neocardenismo hay una gran incompreensión sobre la naturaleza de estos movimientos, y una intensa lucha por el poder que dificulta enormemente la realización de alianzas con fuerzas que no están dentro del partido. Quinto, porque el mismo neocardenismo

se expresó diferenciadamente en el país, de manera tal que su influencia en el Norte fue mucho menor a su influencia en el Sur, por lo que las organizaciones regionales se vieron atravesadas por esta ola de protesta de manera desigual.

#### El ascenso reivindicativo

Una de las consecuencias más importantes de la insurrección electoral de julio de 1988 fue la reanimación de la lucha reivindicativa. Las movilizaciones de protesta fortalecieron a las organizaciones populares. La dirección neocardenista fue eficaz en conducir el combate evitando un enfrentamiento frontal con el Estado, y dentro de éste los sectores reformistas pudieron frenar a quienes clamaban por la represión. La tensión político-electoral y la debilidad relativa con la que la nueva administración llegó al Poder debilitaron los hilos de control. Cientos de miles de mexicanos vivieron directamente la derrota de los invencibles, experimentaron confianza en las fuerzas propias. De manera desigual en las regiones y los sectores, las organizaciones sociales comenzaron a protagonizar importantes movilizaciones por sus demandas.

Aunque desiguales, las respuestas del Poder al ascenso popular fueron mucho más cautelosas que en el pasado. Ciertamente, la represión en contra de algunos sectores se mantuvo, la violencia rural por parte de cacicazgos locales no fue detenida, y la represión estatal en el terreno electoral se agudizó, pero muchos movimientos tuvieron por vez primera acceso a canales de negociación reales, y algunos hasta pudieron resolver varias de sus demandas. Nuevos interlocutores fueron reconocidos de facto al margen de los canales corporativos y pasaron a jugar un papel cada vez más relevante en la vida política nacional. En otros casos, como en el de las organizaciones rurales, los espacios de negociación con el Poder fueron generados desde la cúpula, de manera que, en mucho la formación del CAP -y de los beneficios económicos y políticos que ello ha traído- fue una propuesta del mismo Ejecutivo Federal.

El ascenso reivindicativo mostró con claridad que se requerían de escenarios para la transición que renovaran las dirigencias sociales gestadas durante el cardenismo. Estos escenarios apuntan al mantenimiento de un sistema corporativo renovado que permita ciertos márgenes de democracia interna, a la renovación del PRI -su paulatina transformación en un partido de ciudadanos de base territorial-, al establecimiento de nuevos "beneficiarios" populares de un pacto social renovado, y al sostenimiento del PRI como partido preponderante. En la implementación de esta transición se han utilizado tres herramientas claves. La primera consiste en la implementación de una política de solidaridad.<sup>4</sup> La segunda es el nombramiento gubernamental de negociadores que, más allá, de sus funciones oficiales han sido un instrumento en la concertación en torno a conflictos sociales graves. El tercero es la apertura gubernamental para registrar partidos estatales constituidos sobre la base de organizaciones regionales, que puedan -mucho probablemente- constituir un partido político nacional.



Pablo Proaño

#### Herramientas para la transición

La política de solidaridad ha canalizado selectivamente los recursos que en el pasado subsidiaban de manera amplia a muchos sectores de la población. Esto es, el adelgazamiento estatal y la disminución creciente del gasto público destinado a bienestar social y la compactación de los ingresos populares ha sido "compensado" -muy desigualmente- con la canalización selectiva de recursos a sectores que viven en condiciones de extrema pobreza.<sup>5</sup> A lo largo de casi dos años una amplia franja de organizaciones autónomas han podido beneficiarse económicamente e impulsar proyectos de desarrollo regional. Al inicio del actual sexenio estas organizaciones pudieron saltarse las trancas de los gobiernos estatales y concertar a nivel federal, pero en la actualidad se enfrentan a que la mayoría de estos recursos pasan ya por los gobiernos de los estados y las condiciones políticas que se les imponen para acceder a ellos son mucho mayores, si es que lisa y llanamente no se les bloquea. En un primer momento, las dirigencias del neocardenismo ajenas a las problemáticas de la construcción de organizaciones sociales autónomas cuestionaron a las organizaciones que fir-

maron pactos de concertación, acusándolas de "legitimar" al régimen. Muy pronto, sin embargo, tuvieron que regular y hacer buches amargos. La misma COCEI recibió en Juchitán al Presidente Salinas y firmó con él convenios de concertación. Pero también tuvieron que hacer berrinches un buen número de gobernadores y caciques regionales que vieron como de esta forma sus opositores tradicionales se legitimaban. Evidentemente, ha habido muchos problemas en la implementación de estos convenios. Las organizaciones corporativas se han llevado un gran tajada, a pesar de sus enormes dificultades para concretar proyectos de desarrollo viables. Por su parte, las organizaciones autónomas, además de los problemas ya señalados, se han topado con su debilidad técnica para formular e implementar los proyectos, y con mil y una trabas burocráticas. Dentro del Gobierno, el manejo de estos recursos y los canales para el trato con los nuevos interlocutores han desatado una intensa guerra interna que de vez en vez aflora a la opinión pública en periodizos y remociones de funcionarios.

Cada vez más, ante los conflictos entre la sociedad y el Estado se han hecho presentes funcionarios gubernamentales con autoridad para mediar entre las partes. Usualmente desarrollan estas funciones al margen de su nombramiento oficial y en detrimento de los responsables del ramo. Manuel Camacho, Gustavo Gordillo o Carlos Rojas son figuras que abierta o discretamente han intervenido en la implementación de una política de concertación, en áreas que lo mismo tratan la cuestión sindical -Moctezuma o magisterio-, los proyectos de desarrollo, la violación a las garantías individuales o los conflictos electorales. Su intervención busca crear mecanismos de negociación entre las partes que eviten la confrontación radical y el desgaste innecesario de la actual administración. Estas intervenciones han provocado una enorme irritación dentro de las élites políticas tradicionales. Como en todo mecanismo extra-institucional los límites de esta intervención, así como las reglas del juego para generarla son muy precisas. De cualquier manera, una y otra vez, las coordinadoras de masas, sus acuerpamientos regionales o los destacamentos en lucha, las han buscado.

Tanto el CDP de Chihuahua como el CDP de Durango obtuvieron su registro como partidos estatales. El PRT, después de perder su registro nacional conservó registros estatales en estados como Guerrero. Fuerzas sociales en el Estado de México y Puebla han solicitado, o están por hacerlo, su registro como partidos estatales. Salvo en el caso de Oaxaca, donde el gobernador se opuso a aprobar una iniciativa de este tipo, los solicitantes no han tenido mayores problemas para obtener sus registros. En la formación de los partidos estatales coinciden tres factores: la iniciativa gubernamental de restar fuerza al PRD, la voluntad de varias organizaciones regionales autónomas por expresarse diferenciadamente del neocardenismo - a la que se suman los grupos de izquierda "integristas", y la cerrazón y miopía política de la dirección del PRD que ha clausurado una y otra vez la posibilidad de construir una convergencia política con estas fuerzas que no signifique su subordinación. En ese contexto, todo empuja a que una parte de la izquierda

social avance en la articulación partidaria al margen del neocardenismo.

Sin embargo, esta profunda metamorfosis ha significado para quienes se empeñan en la formación de partidos propios una profunda modificación de sus marcos de referencia del quehacer político. De entrada porque a pesar de que la incursión en la esfera partidaria-electoral significa una ampliación de los espacios políticos, ésta se realiza en un momento en el que el Poder ha retomado algunos de los viejos planteamientos de las coordinadoras: desde allí se habla de autogestión, autoconstrucción, etc... A pesar de que en muchos casos se trata solamente de discursos, las señas de identidad de estas organizaciones se han reducido. Este "robo" de discursos ha sido también puesto en práctica por varios dirigentes sociales "reconvertidos". Pero además, y como resultado de la necesidad de ser eficaces en este nuevo espacio, las organizaciones de resistencia se han convertido en bases sociales para la construcción partidaria, y la reivindicación de la autonomía se ha transustanciado para dar lugar -en algunos casos- a prácticas corporativas y clientelares. Hoy, las barreras entre organizaciones sociales y partidos se han diluido. En términos generales, sigue privando entre las direcciones de estos movimientos una enorme incompreensión de su función en el mapa político nacional. Legitiman su existencia partidaria argumentando indistintamente el avance de la derecha panísta o su negociación de servir de "cabuz" en la política de la burguesía nacional que -según ellos- representa el cardenismo; reivindican su derecho a ser reconocidos como partido en virtud de su real implantación social, aunque sus propuestas a la sociedad sean más sectoriales que nacionales. Además, existe una especie de amnesia acerca de su papel como regulador de ciertas demandas sociales -vivienda, abasto, educación, etc.- o de contrapeso hacia lo que el actual equipo gobernante ve como su principal enemigo político externo: el neocardenismo. En el camino la formación de estos partidos como un partido nacional será sólo posible sobre la base de la asociación con la izquierda integrista; el "corto circuito" que esta relación provocará y lo endeble de los compromisos establecidos son fácilmente previsibles.

La fractura en un posible polo de centro-izquierda que significa la formación de un partido nacional a partir de algunos destacamentos de las coordinadoras de masas es evidente. Por supuesto nadie puede argumentar que el neocardenismo tiene la titularidad de la oposición en México. Pero tampoco nadie puede negar que se trata del movimiento social de protesta más importante que existe. El neocardenismo tiene, sin embargo, una gran responsabilidad en este divorcio. Algunos dirigentes de las coordinadoras de masas se han incorporado a la construcción del PRD de manera destacada. Sin embargo, se han topado con múltiples obstáculos. Primero, la estructura territorial del partido ha dejado fuera a los sectores organizados. Segundo, las cuotas de poder y las luchas por la representación de los cargos públicos ha cerrado prácticamente los espacios a quien no se dedique de tiempo completo a la lucha dentro del partido. Tercero, tanto desde varias de sus vertientes de izquierda

como de ex-priístas sigue prevaleciendo una cultura utilitaria hacia las organizaciones de masas y una gran incompreensión del papel que pueden jugar. Todo ello hace que existan enormes dificultades para que dentro del partido se reconozca la fuerza real de estos acuerpamientos y se pueda construir con ellos una nueva convergencia.

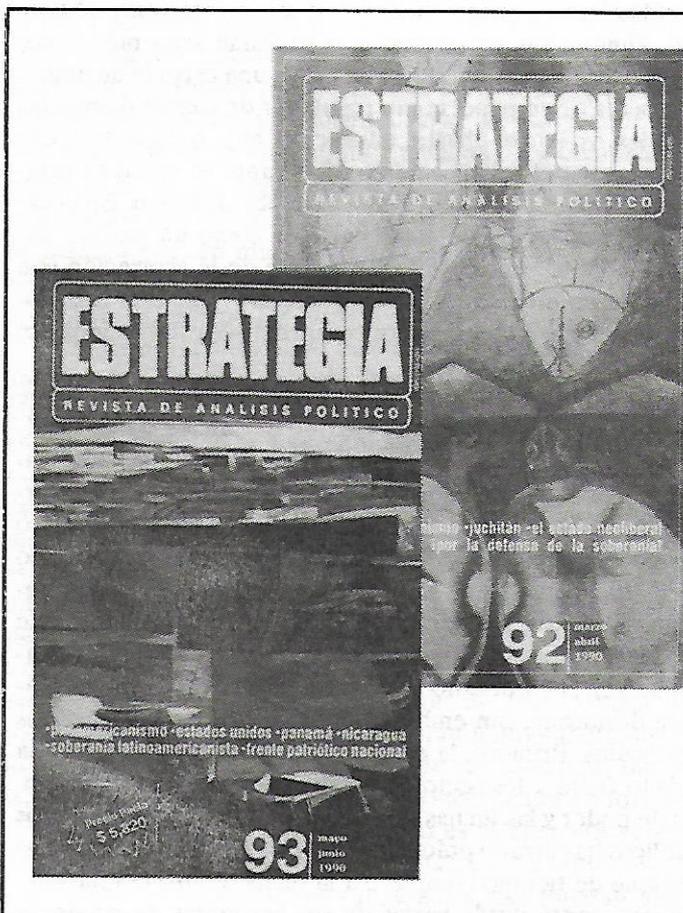
### Los escenarios

Si de algo se puede estar seguro es que la transición hacia un nuevo esquema de relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado no será ni lineal ni fácil. En ella están profundamente imbrincados la reforma del Estado, la reforma del PRI y las posibilidades de éxito del modelo de desarrollo económico salinista. Una multiplicidad de actores, tanto dentro como fuera del Estado, empujan hacia posiciones distintas. El resultado final todavía es incierto y depende en mucho de la articulación entre las iniciativas desde arriba y la movilización y capacidad de conducción desde abajo. Está en juego tanto las capacidades de maniobra del grupo gobernante, su vocación trasformadora y la fuerza que tenga para impulsar reformas desde arriba, como la presión que se genere desde abajo y la habilidad con que esa presión se maneje.

Las organizaciones corporativas han demostrado muy poca capacidad para adaptarse a los cambios. La resistencia de la CTM a ellos evidencia que el uso de la violencia y la

tentación de aplastar están ampliamente arraigadas en el aparato. Lo mismo sucede en el terreno electoral donde se continua hostigando a la oposición de centro-izquierda.

Las coordinadoras de masas han respondido -salvo excepciones notables- con una gran lentitud a los cambios. De hecho se encuentran atrapadas en el falso dilema de seguir haciendo más de lo mismo y quedar atrapadas en una lógica economicista radical, o convertirse en partidos políticos con un alto costo. Así, la CNTE, por ejemplo, ha tenido enormes dificultades para capitalizar la situación que generó al precipitar el recambio en la dirección nacional y se encuentra empantanada en una discusión interna entre quienes promueven una política de resistencia y quienes trabajan por una política propositiva. Entre estas excepciones se encuentra la UNORCA, quien ha optado por constituirse en un polo gremial nacional, procurando articular la convergencia campesina y desarrollando propuestas nacionales desde allí, al tiempo que proporciona a sus miembros cobertura política para su desarrollo. En términos generales, esta posibilidad ha sido abandonada por el resto de las coordinadoras en aras a una especie de parálisis teórico-práctica, o de la apuesta partidario-electoral; ambas iniciativas pueden terminar muy fácilmente nadando en un mar de apatía social seguido de una etapa de transformismo, generalizado. En este caso, el recambio estatal de neocorporativismo con democracia al interior de las organizaciones sociales entraría como "anillo al dedo".



¡PARA TENER UNA POSICION AL DIA!

# ESTRATEGIA

REVISTA DE ANALISIS POLITICO

Dirección Colectiva: Alonso Aguilar M., Ignacio Aguirre, Fernando Carmona, Jorge Carrión, Ignacio Hernández G.

Quince años con información, ensayos y propuestas bimestrales sobre la situación económica, social y cultural de México y Nuestra América.

SUSCRIPCIONES Individual: 30 mil pesos, Institucional: 60 mil pesos, al extranjero: 35 USD, ejemplar: 6 mil pesos

Visítenos en Dr. Vertiz 1295-202, Col. Letrán Valle, o envíe cheque o giro al Apdo Postal 73-206, México 03650 DF. Teléfono 604-7539